

Panorama General

El inicio de este atípico curso político europeo ha estado condicionado por tres elementos, principalmente. En primer lugar, el impacto de la pandemia del coronavirus en todas las esferas de la vida pública y privada desde que estallara a principios de año. Un estallido que se ha traducido en un drástico deterioro de la economía y el empleo europeos, aunque con desigual incidencia por países y sectores.

Es el caso de España, cuyo PIB sufrió una caída del 18,5% en el segundo trimestre, muy por encima de la media de la Eurozona (-11,8%), y de sectores como el turismo, caracterizados por una fuerte estacionalidad y por una mayor exposición a la restricción de movimientos que varios Estados miembros impusieron en plena temporada estival, sin la coordinación y proporcionalidad que se hubiera deseado.

Tras el acuerdo logrado en julio por el Consejo Europeo, la prioridad de las Instituciones es finalizar la negociación de los textos jurídicos que componen el Marco Financiero Plurianual 2021-2027 y el Plan Europeo de Recuperación antes de final de año. Algo esencial para que los fondos (1.074 millones de euros y 750.000 millones respectivamente) estén disponibles lo antes posible.

En segundo lugar, el nuevo curso viene marcado por las intensas negociaciones entre la Unión Europea y Reino Unido para lograr un acuerdo sobre el marco que deberá regular la relación bilateral a partir del próximo 1 de enero, cuando se materialice el “Brexit económico”. Unas negociaciones que, iniciadas el 2 de marzo, van por la octava ronda, celebrada en Londres del 8 al 10 de septiembre. Aunque el objetivo sigue siendo pactar un texto común antes del próximo 15 de octubre, las posiciones siguen divergiendo en asuntos fundamentales, como la integridad del mercado interior europeo, la garantía de un entorno de competencia leal y la gobernanza del futuro tratado bilateral.

Dado que el riesgo de que estas negociaciones descarrilen es cada vez más alto, la tarea de la Comisión Europea es doble, continuar negociando con Reino Unido al tiempo que intensifica los preparativos para atenuar los efectos de una desconexión económica caótica de dicho país en los Estados miembros y sus empresas.

En tercer lugar, el Ejecutivo europeo se enfrentó a su primera crisis de gobierno, que ha desembocado en una remodelación de carteras. El 26 de agosto, fruto de las presiones ejercidas por el Gobierno de Irlanda, Phil Hogan dimitió de su puesto como Comisario de Comercio por haber infringido las normas de contención de la COVID-19 en su país natal.

Una cartera muy importante, no solo por las citadas negociaciones con Reino Unido sino por las tensiones comerciales con Estados Unidos y la compleja relación con China.

El 8 de septiembre, la Presidenta de la Comisión Europea anunció que Valdis Dombrovskis, Vicepresidente Ejecutivo responsable de Economía, se hará cargo de la política comercial, pasando a la candidata irlandesa, Mairead McGuinness, la responsabilidad sobre Servicios Financieros, Estabilidad Financiera y Unión de Mercados de Capital. De esta manera, la Presidenta Von der Leyen logró la paridad de género del Colegio de Comisarios, cumpliendo su compromiso inicial y, además, confirió a la política comercial un mayor protagonismo dentro de la política económica europea en una coyuntura especialmente compleja en la escena internacional.

Desde un punto de vista empresarial, la prioridad máxima que ha de tener la Unión Europea en este último cuatrimestre de 2020 es, como se ha mencionado, asegurar que tanto el Marco Financiero Plurianual como el Plan Europeo de Recuperación están plenamente operativos antes de finales de año. Acelerar el proceso decisorio entre el Parlamento Europeo y el Consejo es, por tanto, crucial. El hecho de que sea Alemania el país que preside ésta última institución hasta el 31 de diciembre es positivo, dada la capacidad de liderazgo mostrada desde que asumió esta responsabilidad el pasado 1 de julio.

En paralelo, es muy importante que los Estados miembros, en especial los más afectados por la pandemia como España, trabajen en la elaboración de planes de recuperación y resiliencia lo suficientemente consensuados y coherentes como para trasladar confianza, seguridad jurídica y predictibilidad. Tres cualidades que, si siempre han sido indispensables en cualquier ámbito de la política pública, ahora lo son todavía más.

Desde BusinessEurope, en el ámbito europeo, y desde CEOE, en el plano nacional, estamos y estaremos siempre a disposición tanto de las instituciones europeas como del Gobierno de España y la sociedad en su conjunto para trabajar en la recuperación de la infraestructura económica y social, desde el diálogo, la concertación y el consenso.

Bruselas, 10 de septiembre de 2020